

JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS

ABOGADO

Avenida 26 # 27-94 Neiva Huila Tel. 8758523-3185412183

Correo electrónico: abogado.josefrancisco@gmail.com

Señor:

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE NEIVA HUILA (REPARTO)

Ciudad

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DTE: MARTHA HELENA GUZMAN MESA

**DDOS: COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS NIT. 800.149.496-2,
LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIAS PORVENIR S.A. NIT. 800.144.331-3 y LA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES**

JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS, mayor de edad, domiciliado en Neiva (Huila), abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.253.491 de Neiva (H), con T. P. Nro. 264.268 del C. S. de la Judicatura, en calidad de apoderado de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, identificada con cédula de ciudadanía número 51.694.065 expedida en Bogotá (D.C.), de acuerdo a poder adjunto, con todo respeto, por medio del presente escrito presento DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA DE NULIDAD POR INEFICACIA DEL CAMBIO DE REGIMEN POR FALTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, en contra de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. NIT. 800.144.331-3, con oficina en Neiva, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS con NIT. 800.149.496-2 y LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES- NIT: 900.336.004-7, con oficina en Neiva, representadas por sus gerentes o por quien haga sus veces al momento de la notificación, de acuerdo con las siguientes:

HECHOS

PRIMERO. - Mi poderdante, la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, nació el 24 de diciembre 1962, lo que indica que actualmente cuenta con 60 años de edad, como se prueba con su cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento.

SEGUNDO. - De acuerdo con el reporte de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, mi poderdante inició su cotización y afiliado al Seguro Social hoy Colpensiones, es decir, afiliado al régimen de prima media con prestación definida en el año de 1980 hasta el año 1997 cuando pasó a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

TERCERO. - Es un hecho que desde la ley 100 de 1993, se implementó en Colombia otro régimen pensional conocido como RAIS- Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por tales fondos privados y se inició una campaña agresiva para que empleados y trabajadores en general cambiaran de régimen y se afiliaran o trasladaran a esos fondos privados.

CUARTO. - En el año 1997 un asesor Comercial de PORVENIR S.A., abordó a mi poderdante para brindarle el portafolio de servicios que ofrecía LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., recalcando en las supuestas ventajas y beneficios pensionales que traería el trasladarse del Régimen de prima media al de Ahorro Individual con solidaridad al Fondo Privado PORVENIR S.A.

QUINTO. - Mi poderdante no fue informado oportunamente por PORVENIR S.A., que al cumplir los 57 años de edad no tendría derecho a la pensión digna porque con la capacidad de aporte no

podría acumular capital voluntario brindándole una falsa y errónea asesoría.

SEXTO. - Los argumentos esgrimidos por el asesor para convencer a mi poderdante tuvieron como base las supuestas ventajas y beneficios de pensionarse con un monto superior al de prima media, evitar perder las semanas cotizadas y el derecho a pensión ante la liquidación inminente del Seguro Social, sin mencionar ninguna desventaja del fondo.

SEPTIMO.- El prometedor panorama planteado por el asesor de PORVENIR S.A., indujo a mi poderdante, la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, autorizar su traslado del Régimen de Prima Media del ISS donde se encontraba afiliado, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PORVENIR S.A., no siendo consciente en ese momento mi poderdante de las graves implicaciones de la decisión que tomaba porque fue inducido al error al ofrecerle supuestas ventajas y beneficios que le traería el traslado ya que el asesor de PORVENIR S.A. omitió información veraz y suficiente que no le permitieron a mi poderdante tener elementos de juicio claros y objetivos al momento de tomar la decisión de su traslado de régimen pensional, pues de percatarse de todos los riesgos y del verdadero capital real y suficiente que debería tener en la cuenta de ahorro individual para obtener una mejor pensión en el RAIS, nunca se hubiese trasladado.

OCTAVO. - La información verbal exigua y engañosa, que le brindó PORVENIR S.A. se demuestra, con el hecho de que nunca en ese momento le hicieron una proyección del capital que debería acumular en el tiempo para obtener una pensión digna, con lo que se hubiera percatado de los mejores beneficios del régimen de Prima Media donde se encontraba afiliado.

NOVENO. - Que al momento que mi poderdante firmó el traslado de régimen por errónea y deficiente información del asesor de PORVENIR S.A. en esa fecha ni posteriormente le entregó a mi poderdante el reglamento ni el respectivo plan de pensión, tal como lo ordena el artículo 15 del Decreto 656 de 1994.

DECIMO. - Mediante oficios del 20 y 21 de noviembre del 2023 se solicitó a COLPENSIONES, PORVENIRS S.A. y COLFONDOS S.A. la nulidad y/o ineficacia del traslado de régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, o en su defecto, la indemnización plena de perjuicios a cargo del fondo por trasgredir el deber de información al momento del traslado de régimen pensional.

DECIMO PRIMERO.- En este caso, ninguna prueba permite establecer que el traslado al régimen de ahorro individual por parte de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, se hubiese realizado bajo los parámetros de libertad informada y transparencia mínimos, porque PORVENIR S.A. no cumplió con su deber legal de brindarle una información adecuada, suficiente, cierta y comprensible sobre las etapas del proceso de afiliación; y sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de Ahorro Individual con Solidaridad.

DECIMO SEGUNDO. - Que mientras en el Régimen de Ahorro Individual donde se encuentra actualmente pensionada mi poderdante solo alcanzó a una pensión del mínimo (garantía de la pensión mínima), a sus 57 años de edad, mientras que en el Régimen de Prima Media de Colpensiones a esa misma edad hubiese recibido una pensión aproximada de \$3.683.429, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación correspondiente al promedio de los 10 últimos años de servicio y aplicando la reglamentación y la formula prevista en la ley 797 de 2003 para obtener el monto de la pensión de vejez,

corresponde éste al 80% del Ingreso Base de liquidación (IBL \$4.604.286), tal como se prueba con la proyección pensional y la simulación que se anexa a la presente, valor que sin duda le era más favorable y que repercutió en su calidad de vida y en el de su familia.

DECIMO TERCERO: Por lo anterior, mi poderdante sufrió un perjuicio económico y moral consolidado y futuro, por la diferencia pensional entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella hubiese tenido en el RPMD.

DECIMO CUARTO. – Que la señora **MARTHA HELENA GUZMAN MESA**, me ha conferido poder especial, amplio y suficiente, para actuar en su representación en el presente trámite judicial.

PRETENSIONES PRINCIPALES

Solicito que previo los trámites de un proceso ordinario declarativo y una vez reconocida mi personería para actuar como apoderado del demandante, proferir las siguientes declaraciones y condenas.

PRIMERA. - Declarar la ineficacia del traslado de la señora **MARTHA HELENA GUZMAN MESA**, del régimen de Prima Media con Prestación Definida, al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por **PORVENIR S.A.**, por falta de consentimiento informado al momento del traslado, atribuido a **PORVENIR S.A.**

SEGUNDA. - Como consecuencia de lo anterior, ordénese el **TRASLADO** de mi poderdante, la señora **MARTHA HELENA GUZMAN MESA**, del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS** en

donde se encuentra pensionada actualmente, al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, régimen al que se encontraba afiliado antes del traslado a PORVENIR S.A.

TERCERA. - Que se ordene a LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS que en término máximo de 30 días efectúe el traslado de la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual del actor como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales aseguradas, con todos sus frutos e intereses, rendimientos financieros, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, seguros previsionales, con todos sus frutos e intereses, sin descontar la cuota de administración, que reposan en la cuenta individual de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, sumas debidamente indexados con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES- como si nunca se hubiese trasladado de régimen pensional, así como de toda la información con detalle de semanas cotizadas al tenor de los artículos 7 y 8 del Decreto 3995 de 2008 y demás normas concordantes y complementarias.

CUARTA. - Condenar a LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., Y A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES al pago de las costas y agencias en derecho que se generen como consecuencia de este proceso.

QUINTA. - Se decreten las demás condenas que ultra y extrapetita decida el señor Juez al tenor del artículo 50 del Código procesal del Trabajo y Seguridad Social.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

En el hipotético caso de no prosperar las pretensiones principales, desde ya, solicito las siguientes pretensiones subsidiarias:

PRIMERA. – Se declare que la señora MARTHA ELENA GUZMAN MENSA, sufrió perjuicios patrimoniales y morales debido al cambio de régimen, de los cuales son responsables las Administradoras de fondos de pensiones COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS Y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., por la omisión en el deber de información al no haberse brindado una información clara, precisa, adecuada, suficiente, honesta, comprensible y cierta a mi poderdante la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA al momento del traslado de régimen.

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, se condene a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A al pago de la indemnización plena de perjuicios por en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro por la suma de NOVECIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$910.193.066,88)

TERCERA. – Condenar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., Y A LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES en las costas de este proceso y agencias en derecho que se generen como consecuencia de este proceso.

CUARTA. – Fallar ultra y extrapetita de conformidad con el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social.

FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

Son fundamentos jurídicos de la presente demanda las siguientes normas:

Ley 100 de 1993, artículo 106 que trata sobre la publicidad y promoción de las actividades de las administradoras de fondos de pensiones que deben sujetarse a las normas que sobre el particular determine la Superintendencia Bancaria- hoy financiera- la cual debe ser verás y precisa, que permita escoger la mejor opción, circunstancias que estuvieron ausentes para el caso de mi poderdante.

Ley 100 de 1993, artículo 96, se refiere a que todo plan de pensiones debe ser sometido a consideración de su Superintendencia Bancaria, hoy Financiera- para su aprobación el cual deberá amparar a los afiliados contra todos los riesgos a que hace referencia la ley. Para el caso concreto, no se le hizo ningún plan de pensión y no se previeron los riesgos a que estaría sometido mi poderdante.

Ley 100 de 1993 artículo 60 literal j) estipula que la vigilancia de las entidades administradoras de fondos de pensiones le corresponde a la Superintendencia Bancaria- hoy Financiera- que hace parte del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por lo tanto, a mi poderdante era beneficiaria de las normas de ese estatuto, Decreto 663 de 1993, que es anterior a la actuación de PORVENIR S.A. con mi prohijado en el año 1998 cuando la indujeron erróneamente al cambio de régimen.

Ley 100 de 1993 artículo 106, en el sentido que ordena que toda publicidad o promoción de las actividades de las administradoras de pensiones deberá sujetarse a las normas que sobre el particular determine la Superintendencia Bancaria-hoy Financiera- en orden a velar porque aquella sea verás y precisa. Demostrado está que esto no se hizo con mi poderdante contrariando claramente lo estipulado por la ley por parte de PORVENIR S.A.

Decreto 663 de 1993 artículo 97, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero consagra que las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. Estos requisitos no fueron aplicados para el caso de mi poderdante.

Decreto 656 de 1994 artículo 35, Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones se regirán por las disposiciones especiales de la Ley 100 de 1993 y el presente Decreto y, en lo no previsto en ellos y en su orden, por las normas aplicables a las sociedades de servicios financieros y a las instituciones financieras. Lo que corrobora las normas aplicables para el caso de mi poderdante.

Ley 795 de 2003 artículo 23, éste modifica el numeral 1 del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:

"1. Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. Es decir que reitera lo preceptuado por el Decreto 663 de 1993, que no fue aplicado a mi poderdante al momento de la asesoría.

Decreto 656 de 1994 artículo 15, Todo fondo de pensiones deberá tener un plan de pensiones y un reglamento de funcionamiento

aprobados de manera previa e individual por la Superintendencia Bancaria. El reglamento debe contener, a lo menos, las siguientes previsiones:

- a) Los derechos y deberes de los afiliados y de la administradora;
- b) El régimen de gastos conforme a las disposiciones que establezca la Superintendencia Bancaria, y
- c) Las causales de disolución del fondo.

El texto del reglamento, así como del respectivo plan, deberá ser entregado a cada afiliado a más tardar al momento de su vinculación.

Los reglamentos deberán ser redactados de forma tal que sean de fácil comprensión para los afiliados y la copia que de los mismos se entregue a éstos deberá emplear caracteres tipográficos fácilmente legibles. A mi poderdante no le entregaron ni plan de pensión ni el reglamento.

Ley 1328 de 2009 artículo 3°, trae los principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas- dentro de ellas las administradoras de pensiones. Uno de esos principios rectores es la Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna PORVENIR S.A. transgredió este principio para el caso de mi poderdante.

Ley 1748 de 2014 Parágrafo 1° del Artículo 2°, indica como requisito para el traslado de régimen la obligación de brindar doble asesoría, es decir hacerle la proyección para ambos regímenes, para que el usuario pueda tomar una decisión acertada, PORVENIR S.A. nunca ofreció lo anterior a mi poderdante.

Decreto 2071 de 2015, ratifica lo establecido desde 1993 en el sentido de la obligación de las administradoras de pensiones de brindar información veraz, suficiente y oportuna a los usuarios para que puedan escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones bien informadas.

Código Civil Colombiano, artículos 1508 y 1511, advierten sobre la ocurrencia del error de hecho y la forma en que vicia el consentimiento, aplicable al caso concreto, reforzados por la Sentencia C-993 del 29 de Noviembre de 2006 de la Corte Constitucional en el sentido que se deben respetar las normas imperativas y el orden público lo que lógicamente exige una mayor carga de claridad y diligencia de las partes del negocio en su celebración, para evitar las consecuencias adversas del negocio celebrado con ese tipo de vicio.

En ese sentido, encontramos la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral del 09 de septiembre de 2008, con Radicado No. 31989 y ponencia del Magistrado EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, que argumentó lo siguiente:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad.

Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

“La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.

“En estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.

"No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña."

"En consecuencia, también en este aspecto es prospero el cargo, y para la definición de instancia son suficientes las anteriores consideraciones, para revocar la sentencia de primer grado, y en su lugar, declarar la nulidad del traslado que el demandante hizo del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., quien por virtud del regreso automático al régimen de prima con prestación definida del ISS., deberá devolver a ésta todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado."(Negrilla y subraya fuera del texto)

Así mismo existen otros pronunciamientos de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo tema y sentido con son la sentencia radicación 31314 del 6-12-11; Sentencia radicación 33083 del 22-11-11; Sentencia radicación 46292 SL-12136-2014 del 3 de septiembre de 2014 MP Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CLDERON, Sentencia SL-1688 DEL 8 DE MAYO DE 2019 M.P. Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Por su parte, la sentencia SL-1452 de 2019 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indica que no basta la firma del formulario de traslado para probar que la decisión se tomó de manera voluntaria y consentida, recalca el deber de información a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones es exigible desde su creación, la información debe ser clara completa necesaria y transparente, además la constatación del deber de información es ineludible y la obligación de demostrar la entrega de documentación clara y suficiente donde consten los efectos que acarreaba el cambio de régimen y que el simple

consentimiento vertido en el formulario de afiliación no es suficiente para demostrar el consentimiento informado.

Son también concordantes las sentencias SL-1421 de 2019, SL-1688 de 2019, SL-1699 de 2019.

Sentencia de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia SL-56862021 (82139) del 6 de octubre de 2021, donde ratifica la Ineficacia del traslado pensional cuando no se acredita en el juicio el cumplimiento del deber de información en el traslado inicial, sin importar los tránsitos que los afiliados hagan entre administradoras privadas de ese esquema.

La más reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL-843202022 (85499) del 16 de marzo de 2022, donde ratifica que se requiere que la AFP acredite que efectivamente le brindó al afiliado una información completa, clara, integral y oportuna acerca de las características, ventajas, desventajas, condiciones económicas y funcionamiento del RAIS (M.P. Gerardo Botero Zuluaga)

Por otro lado:

la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia SL1113-2022, ha enseñado que el pensionado en el RAIS que se considere lesionado en su derecho puede obtener la reparación de los perjuicios irrogados por las AFP omisas del deber de información y correcta asesoría en el momento de realizarse el traslado de régimen pensional desde el RPMPD, bien a través de la acción principal y directa de indemnización total de perjuicios, o bien de la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional con pretensión subsidiaria indemnizatoria, siempre que, por lo menos, así se plantee en el petitum de la demanda, o en los hechos fundantes de la misma y se haya tenido oportunidad de discutirlos en el proceso. Dijo la CSJ en la referida providencia, lo siguiente:

“...no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño

por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora. (...).

El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados. En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento". (Subraya la Sala).

Sobre la posibilidad de solicitar la indemnización de perjuicios en tratándose de pensionados que se trasladaron del RPMPD al RAIS, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha señalado que «si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora», ello teniendo en cuenta el principio general del derecho según el cual, «quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC)». Lo adoctrinado por el órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral se sustenta en que la acción de indemnización de perjuicios, no es ajena al derecho laboral y de la seguridad social.

En la que en efecto cabe la reparación del daño por la responsabilidad imputable a la AFP, siempre que el petitum de la demanda esté encausado en ese sentido, como en el caso de autos, en donde se pretende que se reconozca a cargo de las AFP del RAIS llamadas a juicio, a título de indemnización de

perjuicios, la diferencia de la mesada pensional que le hubiere correspondido a la promotora de la acción en el RPMPD.

Ahora bien, resulta necesario remitirnos a lo adocinado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC282-2021, en la que expuso lo siguiente: “El daño, como el elemento nuclear de la responsabilidad, consiste en el menoscabo que la conducta dañosa del victimario irroga al patrimonio, sentimientos, vida de relación o bienes de especial protección constitucional de la víctima. Se trata de «una modificación de la realidad que consiste en el desmejoramiento o pérdida de las condiciones en las que se hallaba una persona o cosa por la acción de las fuerzas de la naturaleza o del hombre. Pero desde el punto de vista jurídico, significa la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio» (CSJ, SC10297, 5 ag. 2014, rad. n.º 2003-00660-01; reiterada SC2758, 16 jul. 2018, rad. n.º 1999-00227-01).

En otras palabras, «es ‘todo detrimento, menoscabo o deterioro, que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad’» (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.º 2000-00196-01). 2.1.2. Para que el daño sea susceptible de ser reparado se requiere que sea «‘directo y cierto’ y no meramente ‘eventual o hipotético’, esto es, que se presente como consecuencia de la ‘culpa’ y que aparezca ‘real y efectivamente causado’ (Sentencias de 26 de enero de 1967 (CXIX, 11-16) y 10 de mayo de 1997, entre otras)» (SC, 27 mar. 2003, exp. n.º C-6879); asimismo, debe afectar un interés protegido por el orden jurídico (SC13925, 30 sep. 2016, rad. n.º 2005-00174-01). (...) El principio de reparación integral propugna porque la víctima de un daño sea restablecida a la situación en que se encontraría de no haber sufrido el agravio, de suerte que se mantenga indemne de las consecuencias negativas del hecho culposos.

Por tanto, «el resarcimiento no puede superar la pérdida efectiva, ni generar una ventaja para el damnificado». La Corte, refiriéndose a este principio, ha ordenado «que al afectado por daños en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior..., y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez ‘tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio» (SC, 18 dic. 2012, rad. n.º 2004-00172-01, reiterada en SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.º 2009-0014-01).” (Lo subrayado no lo está en el texto original).

Extrapolando las anteriores consideraciones al caso concreto, a la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, se le ha ocasionado un daño que debe ser reparado por las AFP del RAIS a las que estuvo afiliada, considerando este cuerpo colegiado que ello sí acontece, en razón a que ninguna de las encartadas cumplió con el deber de información al momento del traslado de régimen pensional del RPMPD al RAIS.

No cumplieron con su deber de información frente a la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA a efectos de que esta pudiera advertir las consecuencias que frente a su pensión de vejez tendría el acto de traslado y su permanencia en el régimen privado hasta alcanzar el derecho pensional, ya que ninguna informó a su entonces afiliada sobre su derecho de retracto y la posibilidad que tenía de retornar al RPMPD hasta antes del límite de temporal establecido en el literal d) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 y también las consecuencias adversas del traslado de régimen, mismas que no fueron explicitadas previo al momento de efectuarse el traslado de régimen, ni los posteriores traslados horizontales.

Por lo tanto, esa diferencia pensional es la que precisamente materializa el daño patrimonial generado por la falta de información (culpa), que le es atribuible a las AFP del RAIS

demandadas, pues así lo explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL3535-2021, en los siguientes términos: “Por consiguiente, siempre que dicha pretensión sea plasmada en la demanda -lo que en este caso no ocurrió-, bien podría el juez ordenar a título de indemnización de perjuicios el pago a cargo de la AFP de la diferencia entre la prestación reconocida en el RAIS y aquella que hubiese tenido en el RPMPD. Esto es, imponer el pago de una renta periódica en los mismos términos en que lo habría hecho el régimen de prima media con prestación definida, tanto para el pensionado como para sus potenciales beneficiarios, ordenando compensar o restituir todo aquello a lo que haya lugar”.

resulta pertinente traer a colación lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL373-2021), en torno de la concreción del daño, al resaltar que: “el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado”, lo que en efecto se presenta en el caso bajo estudio, pues la falta al deber de información detallada e íntegra por parte de las AFP previo al momento de la afiliación, determinante de su consentimiento, su permanencia y pleno y satisfactorio disfrute de la pensión, privó a la demandante de la oportunidad de pensionarse con mejores condiciones en el RPMPD, visto que en el ámbito de la responsabilidad subjetiva se denomina “pérdida de oportunidad” como daño reparable, dentro de las siguientes condiciones:

“La Sala, asimismo, en oportunidad reciente, se refirió a “la pérdida de una oportunidad” como “la frustración, supresión o privación definitiva de la oportunidad legítima, real, verídica, seria y actual para la probable y sensata obtención de un provecho, beneficio, ventaja o utilidad a futuro o, para evitar una desventaja, pérdida o afectación ulterior del patrimonio” y luego de hacer mención de las diferentes tesis que plantea la doctrina respecto de la naturaleza del detrimento que se estudia, concluyó que “[a]l margen de la problemática precedente, la pérdida de una oportunidad cierta, real, concreta y existente al instante de la conducta dañosa para obtener una ventaja esperada o evitar una desventaja, constituye daño reparable en

el ámbito de la responsabilidad contractual o en la extracontractual. (Sentencia del 01 de noviembre de 2013, ref.: 08001-3103-008-1994-26630-01, Sala de Casación Civil)”

PRUEBAS

Solicitamos tener en cuenta y practicar las siguientes:

DOCUMENTALES CON SUS RESPECTIVOS FOLIOS

- Registro civil de nacimiento de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA.
- Copia de la solicitud de NULIDAD Y/O INEFICACIA del traslado de régimen o en su defecto la indemnización plena de perjuicios a cargo del fondo, por trasgredir el deber de información elevado ante COLFONDOS S.A. PORVENIR y COLPENSIONES.
- Copia de respuesta negativa por parte de COLPENSIONES.
- Copia de solicitud de formulario de traslado y documentación que probara la asesoría brindada a mi poderdante, así como la proyección de pensión y el comparativo con Colpensiones que debieron hacerle al momento del cambio de régimen ante PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES.
- Copia de Historia Laboral de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA
- Comunicado de reconocimiento pensional de COLFONDOS S.A.

- Cálculo de la pensión en el régimen de Prima Media.
- Calculo de la indemnización plena de perjuicios (lucro cesante consolidado y futuro)
- Fotocopia de la Circular 16 del 2016 de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
- Copia del Decreto 2071 de 2015.
- Extracto sentencia SL- 82139 del 6-10-21.
- Sentencia SL-373 del 2021.

DOCUMENTALES EN PODER DE LA PARTE DEMANDADA:

Para que sean aportadas por las demandadas al momento de contestar la demanda de conformidad con el artículo 31, parágrafo 1 numeral 2 del CPT y S.S:

- A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., para que remita el expediente administrativo a nombre de la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.694.065 de Bogotá (D.C.), el cual contenga todos los documentos relacionados con la afiliación incluido formulario de cambio de régimen.
- Así mismo, para que, de manera concisa y precisa, allegue PORVENIR S.A., la documentación en la que conste la información escrita que le suministró a la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA En el año 1997 al momento de trasladarse, esto es, lo correspondiente a las ventajas y/o posibles consecuencias negativas de los efectos que

conllevaba el cambio de régimen y proyección de la pensión o calculo pensional donde refleje el comparativo pensional con Colpensiones, entre la pensión reconocida en el fondo privado con la que hubiese recibido en Colpensiones.

- Así mismo, para que, de manera concisa y precisa, allegue COLFONDOS S.A., proyección de la pensión o calculo pensional donde refleje el comparativo pensional con Colpensiones, entre la pensión reconocida en el fondo privado con la que hubiese recibido en Colpensiones.
- Así mismo, para que, de manera concisa y precisa, allegue COLPENSIONES., proyección de la pensión o calculo pensional donde refleje el comparativo pensional entre la pensión reconocida en el fondo privado con la que hubiese recibido en Colpensiones.

8. COMPETENCIA Y CUANTÍA

Es usted competente, Señor Juez, para conocer de la presente demanda, en consideración de la naturaleza del proceso, del domicilio de las partes y de ser un proceso sin cuantía, ya que según lo estipulado en el artículo 13 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando se realizan procesos sin cuantía, la competencia la tienen los Jueces del trabajo.

9. PROCEDIMIENTO

A la presente demanda debe darse el trámite de un proceso ordinario de PRIMERA INSTANCIA, consagrado en el capítulo XIV del Código de Procedimiento Laboral, a la vez amparado en el artículo 13 del C.P.T y S.S no es susceptible de fijación de cuantía.

10. ANEXOS CON SUS RESCTIVOS FOLIOS

- Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- Poder para actuar debidamente conferido al suscrito por la señora MARTHA HELENA GUZMAN MESA.
- Fotocopia de la cédula y Tarjeta Profesional del suscrito abogado.
- Fotocopia cédula de mi poderdante.
- Certificado de Cámara de Comercio de PORVENIR S.A.
- Certificado de Cámara de comercio de COLFONDOS S.A.
- Constancias de traslados por correo electrónico a los demandados, al Ministerio Público y a la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado obtenidos del certificado de Cámara de Comercio adjuntos y de las páginas web y de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

NOTIFICACIONES

LA PARTE DEMANDADA:

- La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. Correo electrónico: notificacionesjudiciales@porvenir.com.co.
Obtenido del certificado de Cámara de Comercio.
- COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. Correo electrónico: procesosjudiciales@colfondos.com.co.
Obtenido del certificado de Cámara de Comercio.
- ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES, correo electrónico:
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co. Obtenido de
la página web de la entidad.

- A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. Correo electrónico:
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
Obtenido de la página web de la entidad.
- AL MINISTERIO PÚBLICO.
Correo electrónico:
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
- Regional.huila@procuraduria.gov.co

NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

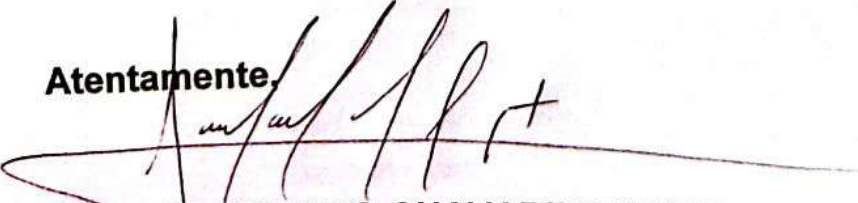
- notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co

Correos electrónicos obtenidos de la página web de la Entidad.

PARTE DEMANDANTE:

- LA DEMANDANTE Y EL SUSCRITO APODERADO correo
Electrónico: abogado.josefrancisco@gmail.com

Atentamente,


JOSE FRANCISCO CHAVARRO ARIAS
C.C. Nro. 1.075.253.491 de Neiva-Huila
T. P. Nro. 264.268 del C. S. de la Judicatura